¿Qué hay detrás del reconocimiento al FMLN-FDR?

Ver página 8

Bandera Socialista

Organo del Partido Revolucionario de los Trabajadores

Número 203, Año V $5.00 7 de septiembre de 1981

La realidad contradice al Quinto Informe

•JLP pretendió ocultar la miseria, la represión y la antidemocracia que padece la población

Dadas las características del sistema político mexicano, el Quinto Informe de Gobierno del presidente López Portillo ha sido en realidad, para todo propósito práctico, su último informe. Y, por ello, en él no hay ya más grandes y ambiciosos planes, no hay las múltiples promesas acostumbradas, sino una defensa, por lo demás bastante pobre, de los cinco años de gestión de López Portillo.

En su quinto informe, López Portillo ha reafirmado que en el año que le resta de su mandato continuará hasta el último día con su política antiobrera y antipopular, con su política de austeridad para las masas y de puertas abiertas para el enriquecimiento estratosférico de los capitalistas, con su política de represión contra todos aquellos que se atrevan a luchar por sus derechos.

Ciertamente, López Portillo ha querido presentar en su informe a un México en el que se ha fortalecido la democracia durante sus cinco años de gobierno. Pero ese México no existe. La mascarada de Reforma Política no es suficiente para ocultar la realidad de la represión política y de la profunda antidemocracia que padece la población trabajadora.

López Portillo se ha jactado de que con la Reforma Política la oposición tiene la oportunidad de expresarse libremente. De entrada dio la bienvenida entre los partidos registrados al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y al Partido Socialdemócrata (PSD). Pero lo que no dijo López Portillo es que el registro de esos partidos, sobre todo del PRT, fue contra su voluntad, obligado por la lucha que sobre todo este último emprendió. Tampoco dijo que de ese Palacio Legislativo estaban ausentes catorce organizaciones y partidos políticos a los que se les negó el registro. Aún más, antidemocráticamente, el PRT tiene condicionado su registro a que obtenga el 1.5 por ciento de la votación en 1982 y, aun con registro definitivo, los derechos legales de los partidos políticos están restringidos por la antidemocrática ley electoral. Irónicamente, además, antes y después de que López Portillo diera la "bienvenida" al PRT, la delegación de este partido fue hostigada permanentemente por la policía, pues lejos de ir en una actitud de "respeto" a las instituciones había salido del "plantón" en el que se protestaba en esos momentos contra la represión y llevaba con Rosario Ibarra —dirigente del Frente Nacional contra la Represión— las banderas de esa lucha hasta el propio informe.

Porque, precisamente, la Reforma Política no ha eliminado la represión contra aquellas organizaciones que, aunque registradas, siguen comprometidas a fondo con las luchas obreras y populares; porque la Reforma Política es solamente una estrecha reforma electoral, mientras que la represión y la restricción de derechos fundamentales siguen sentando sus reales en México.

Precisamente, en su informe, López Portillo ocultó cínicamente el clima de represión que se vive en el país. A pesar de que unos días antes una marcha de más de 20 mil personas había exigido un alto a la represión contra el movimiento obrero, campesino y popular; a pesar de que en el mismo momento en que tenía lugar el informe cientos de personas exigían en un "plantón" instalado desde días antes la presentación de más de 500 "desaparecidos" políticos y la libertad de cuarenta presos políticos, López Portillo guardó el más absoluto silencio al respecto.

Igualmente, López Portillo pretendió ocultar las restricciones a derechos fundamentales —como los de sindicalización, contratación colectiva y huelga— que se han impuesto durante los años de su gobierno, para no hablar de que millones de campesinos siguen sin tierra y sin posibilidades de mejorar sus infrahumanas condiciones de vida, todo ello agravado por nuevas leyes como la de Fomento Agropecuario.

Por otra parte y como para hacer contrapeso a esta realidad nacional, López Portillo resaltó los aspectos de la política internacional del gobierno mexicano que lo hacen aparecer como progresista y que en muchos casos, como cuando defiende los derechos humanos en otros países, están en abierta contradicción con lo que practica en México.

De esta forma, JLP habló enfáticamente del reconocimiento al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional-Frente Democrático Revolucionario (FMLN-FDR) de El Salvador, y reiteró su apoyo a Cuba y Nicaragua.

Es cierto que el reconocimiento del FMLN-FDR juega objetivamente un papel progresivo para la revolución salvadoreña. Este reconocimiento es un triunfo producto de los propios avances de la revolución salvadoreña —que ha sabido poner en su lugar a la junta criminal internacionalmente— y del cada vez más sólido movimiento de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño, particularmente en México, que venía exigiendo al gobierno mexicano desde hace mucho tiempo el reconocimiento de las organizaciones revolucionarias salvadoreñas como fuerzas beligerantes.

Sin embargo, lo que está detrás de este paso del gobierno mexicano es el temor de que el desarrollo de la revolución centroamericana nos afecte aún más directamente, de que la región se vuelva incontrolable. La estrategia del imperialismo norteamericano de enfrentar abiertamente a las revoluciones en curso no sólo apoyando militarmente a la junta salvadoreña, sino interviniendo directamente y

(Pasa a la página 4)



La verdadera respuesta al informe

El "plantón" instalado el 28 de agosto después de la marcha nacional contra la represión, el mitin con el que se levantó, y la presencia de la delegación del PRT y Rosario Ibarra en el Palacio Legislativo constituyeron la verdadera respuesta al informe. De la página 5 a la 7 presentamos reportajes y un balance sobre estas actividades.

Por qué no fue JLP a Guatemala

Ver página 9

¿Qué significan los constantes cambios de una central a otra?

El ascenso de las luchas obreras producido en los últimos años ha atravesado y sacudido a todas las estructuras sindicales. Ya sea como resultado de luchas económicas contra la patronal o directamente por movimientos sindicales más o menos democratizadores, se vive una efervescencia generalizada en los sindicatos sin precedentes en los últimos años. Lo que destaca de este proceso no es ya tanto su radicalidad como su extensión.

Uno de los fenómenos que hemos estado presenciando en los últimos tiempos producto de ese despertar sindical y una vez que ha pasado la "fiebre" del "sindicalismo independiente" —es decir, de formar sindicatos por fuera de cualquier central— es el constante enfrentamiento entre centrales; el constante tránsito de sindicatos de una central a otra; la intensa búsqueda de los trabajadores de organizaciones que respeten la democracia sindical, de rescatar sus sindicatos sin —al mismo tiempo— aislarse del resto de los trabajadores.

Desde luego, este fenómeno no es el rasgo más distintivo del actual ascenso; es sólo uno de sus reflejos, pero no por eso deja de ser importante en las luchas que cotidianamente están dando los trabajadores. Igualmente, las pugnas entre centrales no son nada nuevas. Lo que es nuevo y característico de este periodo es su intensidad y su origen. Es decir, si bien se siguen dando muchos casos en los que la transición de un sindicato de una central a otra es producto de meras pugnas burocráticas —de la rebatinga de los burócratas entre sí por extender sus feudos—, son muchos más los casos en los que estos problemas se producen como resultado de luchas democratizadoras protagonizadas por los trabajadores que los llevan a enfrentarse tanto a los burócratas que dominan el sindicato como a los de la central a la que éste pertenece. Los burócratas de las centrales que entran entonces a disputarse la titularidad de los contratos son los mismos en todos los casos, pero lo que ha dado origen al enfrentamiento es cualitativamente diferente.

En **Bandera Socialista** hemos venido informando del desarrollo de una serie de luchas que tienen en común esta problemática. Y por supuesto no son ni de lejos las únicas. De entre los propios conflictos de este tipo registrados en **Bandera Socialista** tomaremos sólo algunos ejemplos para ilustrar lo que hemos venido diciendo.

Recientemente, los obreros de la Fábrica de Implementos Petroleros SA (FIPSA) —que sostuvieron durante más de dos meses una huelga con ocupación de fábrica— decidieron abandonar las filas de la Confederación Regional de Obreros de México (CROM) ante las reiteradas traiciones de esa central. Durante el movimiento comenzaron a recibir asesoría de Ortega Arenas, dirigente de la Unidad Obrera Independiente (UOI), quien ante la radicalización del conflicto optó por darles la espalda. Por su parte, la empresa contrató los servicios de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) para que hostigara al movimiento con golpeadores y disputara la titularidad del contrato, ya que la CROM no había logrado mantener bajo control a los trabajadores. Finalmente, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se ofreció a asesorar al movimiento y propuso a los trabajadores su adhesión a esa central ofreciéndoles firmar un contrato de empresa, recurso legal mediante el cual los trabajadores están en la posibilidad de elaborar sus propios estatutos y de controlar su contratación sin la intromisión directa de la central. La CTM, sin embargo, condicionó todo esto al levantamiento de la huelga. Los trabajadores aceptaron y se fue a un recuento para decidir entre las diferentes centrales que, por supuesto, ganó la CTM.

Otro ejemplo es lo que sucedió en Fibras Sintéticas SA (FISISA). Ahí —después de haber expulsado, en mayo pasado, a los tres delegados "charros" de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)—, mil 400 de mil 402 trabajadores votaron el pasado 15 de julio a favor de abandonar las filas de la CROC y afiliarse a la CTC, que era la central que los venía asesorando en su lucha democratizadora y que ha prometido respetar su vida democrática interna.

Otro caso, aunque un tanto diferente por su origen, es el sucedido en la Armadora Tepeaca, filial de Olivetti de México en el Estado de Puebla. Inicialmente, los trabajadores de Armadora Tepeaca se encontraban afiliados a la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), misma central a la que pertenece el resto de los trabajadores de Olivetti de México. Con el objeto de dividir a los trabajadores, la empresa realizó una serie de maniobras para quitarle la titularidad del contrato a la COR y depositarla en manos de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos-Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC-CROC). Inmediatamente, los trabajadores respondieron exigiendo la realización de un recuento mediante el que se decidiera qué central obrera detentaría la titularidad de su contrato. Sin embargo, aunque la COR ganó la votación, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje otorgó la titularidad del contrato a la FROC-CROC, sin que la COR realizara protesta alguna ni apelara a la acción de los trabajadores para echar abajo esta maniobra. Todo parece indicar que ambas centrales y la empresa llegaron a un acuerdo para mantener en calma a los trabajadores.

Un ejemplo más es el de los trabajadores de Comercial Mexicana de Plásticos (COMEX), quienes estuvieron inicialmente afiliados a la Confederación General de Trabajadores (CGT). Posteriormente decidieron abandonar las filas de esa central y afiliarse a la CROM. Como esta central tampoco defendiera sus intereses, en febrero de este año los trabajadores iniciaron una lucha por afiliarse a la CTM y por que su sindicato fuera reconocido por las autoridades como sindicato de empresa. De esta manera, en un recuento, los trabajadores decidieron afiliarse a la CTM, aunque las autoridades laborales aún no dan su fallo.

Como ya decíamos, los constantes cambios de centrales obreras son una forma más en la que se está manifestando la lucha de los trabajadores mexicanos por democratizar sus sindicatos y estar en la posibilidad, por medio de ello, de conquistar mejores condiciones de vida y de trabajo.

En efecto, en la gran mayoría de los casos que se han producido en los últimos tiempos, los cambios de centrales han sido precedidos por el derrocamiento de direcciones "charras" locales, el que a su vez ha sido previo o simultáneo a agudos conflictos con la patronal.

La reacción de la burocracia de las diferentes centrales ha sido la de tratar de adaptarse a las nuevas condiciones una vez que un sector de ella no ha podido resolver los conflictos con los métodos tradicionales. Se trata, por decirlo así, de una especie de relevo entre las distintas burocracias con tal de no perder el control sobre los trabajadores. Por supuesto, ésta no es simplemente una respuesta concertada de acuerdo a los intereses de la burocracia en su conjunto. En primera instancia, ello tiene que ver con las tradicionales pugnas interburocráticas —que se ven exacerbadas por el despertar sindical de los trabajadores—, con la disputa por los sindicatos entre los diferentes sectores de la burocracia, en la que aprovechan incluso a los movimientos democratizadores que son sus enemigos mortales.

De esta manera, cuando un movimiento democratizador rompe el control de un sector de la burocracia, la central que entra al "relevo" trata de adaptarse a esas condiciones con el objetivo de encauzar posteriormente sobre canales burocráticos a los trabajadores. Así, la adaptación de la burocracia no consiste en ponerse a la cabeza de los movimientos o impulsarlos, sino en "apoyarlos" y "asesorarlos", haciendo y prometiendo algunas concesiones en la perspectiva de mediatizarlos posteriormente y recuperar el control perdido.

Con tal de ganar un sindicato y no perder la posibilidad de mantener el control sobre los trabajadores, los burócratas cambian de máscara según las necesidades. Así, la CTC se presenta con fachada democrática en FISISA mientras aparece como auténtico esquirol en FIPSA. La CTM, por su parte, se presenta como alternativa "respetuosa" de la democracia en FIPSA y COMEX —aunque a condición de que se acepten sus métodos de "lucha"—, mientras se comporta como una verdadera camarilla gangsteril en la mayoría de los sindicatos que controla.

En cuanto le es posible, la burocracia busca corromper a las direcciones locales democráticas o descabezarlas, si aquello no resulta. En todo caso, la burocracia utiliza el método de desgastar a los movimientos que dieron origen al conflicto.

¿Cuál debe ser la actitud de la vanguardia obrera ante la situación que hemos estado describiendo?

En primer lugar, como los propios trabajadores lo han demostrado, es posible y correcto aprovechar las pugnas entre los burócratas de las diferentes centrales para avanzar en la democratización de los sindicatos. En la medida en que cambiar de una central a otra permita en lo inmediato garantizar ciertas autonomía y democracia sindicales, ese paso es válido. Como ya lo han demostrado años de experiencia, la alternativa de convertirse en un sindicato "independiente" es una salida falsa que sólo lleva al aislamiento de los trabajadores más radicalizados con respecto al conjunto de la clase obrera, además de que eso no garantiza que no habrá burocratización.

Sin embargo, la vanguardia obrera jamás debe cometer el error de alimentar en los trabajadores ilusión alguna con respecto a que los burócratas de una central son mejores que otros. Ese sólo puede ser el camino más corto para dar al traste con todo lo ganado. Aprovechar las pugnas intercentrales —sacarle siquiera algún provecho a la división de la clase obrera en innumerables centrales que han creado los burócratas— no debe significar en modo alguno depositar confianza en cualquier sector de la burocracia.

Por el contrario, la vanguardia obrera debe explicar claramente a los trabajadores a qué razones tácticas obedece en un momento dado el cambio de una central a otra, qué es la burocracia y qué persigue al presentarse como alternativa.

Todas las centrales sin excepción están dominadas por camarillas burocráticas que actúan en función de sus propios intereses y privilegios, y tienen el papel de sujetar a los trabajadores a las necesidades de los patrones y su gobierno. La existencia de diferentes centrales obedece no a que unas sean más democráticas que otras, sino al interés de la burocracia y el gobierno de mantener divididos a los trabajadores. Los burócratas no pueden aceptar la democratización de los sindicatos sin poner en peligro su existencia, ni mucho menos que los trabajadores alcancen su independencia política con respecto a los patrones y su gobierno, pues es su papel de conciliador entre éstos y los trabajadores lo que le permite vivir. Como lo hemos expuesto anteriormente, si una central se presenta como alternativa en un conflicto esto no es sino una adaptación momentánea para finalmente reimponer el control vertical sobre los trabajadores.

Por otra parte, si bien el cambio de adscripción de una central a otra puede utilizarse como una solución táctica inmediata, ésta no puede constituir una meta de los trabajadores. A fin de cuentas, los problemas por los que los trabajadores decidieron cambiar de central no dejarán de repetirse.

Por ello, la vanguardia obrera debe presentar al conjunto de los trabajadores una alternativa de más largo plazo orientada a resolver realmente los problemas de la democracia sindical y la unidad obrera.

En primer lugar, los trabajadores no pueden conformarse con la democratización de su sindicato; es indispensable organizarse con otros trabajadores para luchar por la democratización de todos los organismos sindicales. Sólo así puede avanzarse firmemente en la democratización sindical.

En segundo lugar, hay que vencer la atomización de la clase obrera. Por ello, más que pasarse la vida cambiando de una central obrera a otra, hay que comenzar ya a plantear la lucha por acabar con esa fragmentación. Es necesario luchar por construir sindicatos nacionales por rama industrial. Más aún, hay que romper los feudos de la burocracia que son las diferentes centrales y plantear la lucha por construir una central obrera única.

En lo inmediato, la táctica de cambiar de una central a otra debe ser acompañada de otras medidas prácticas. El gobierno, la patronal y los "charros" cuentan con armas poderosas para, a la larga, absorber, mediatizar o derrotar a los movimientos democratizadores. La única forma de proteger las conquistas democráticas es consolidarlas. Por ello, sin confiar en las promesas de los burócratas, una vez que se ha cambiado de central es indispensable fortalecer las estructuras democráticas internas, mantener la participación activa de los trabajadores, conservar al máximo la independencia en las decisiones con respecto a la central a la que se pertenezca. Igualmente, es importante buscar la más amplia solidaridad y la unidad de los sindicatos en lucha. Las coordinadoras sindicales regionales pueden ser una importante base de apoyo para resistir las presiones de la burocracia. ■

directorio

Bandera Socialista

Organo del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT, Sección Mexicana de la Cuarta Internacional). Por acuerdo de la Comisión Federal Electoral, el PRT obtuvo su registro como Partido Político Nacional el 11 de junio de 1981.

Director: Héctor de la Cueva.
Consejo de Redacción: Manuel Aguilar Mora, Arturo Anguiano, Alfredo López, Margarito Montes Parra, Ricardo Pascoe, Sergio Rodríguez, Edgard Sánchez.
Equipo Técnico: Rosa Amelia González, Valentín González, Enrique Hernández, Roberto Iriarte, Agustín del Moral, Francisco Ramírez, Martha Rodríguez, Leslie Serna.
Fotografía: Ma. Esther Alvarado, Eduardo Lugo.
Administración: Ruth Betancourt.
Domicilio de la Redacción y de la Administración: Baja California 71, Colonia Roma, México 7, DF. Teléfono 584 9208. Impreso en Litho Balumcanán, teléfono 763 1275.

Los artículos firmados no expresan necesariamente el punto de vista de esta publicación. **Bandera Socialista** aparecerá todos los lunes de 1981 excepto el 5 de enero, el 13 de abril, el 14 de diciembre, el 21 de diciembre, el 28 de diciembre, y los lunes que coincidan con la realización de la escuela de cuadros y el congreso del partido programados para este año y cuyas fechas exactas daremos a conocer posteriormente. Toda correspondencia debe ser enviada a nombre del Director al Apartado Postal 11-423, México 11, DF.

Suscripciones en la República Mexicana. Por correo ordinario de tercera clase (sobre abierto): seis meses $132.00 MN; por correo ordinario de primera clase: seis meses $180.00; por correo aéreo: seis meses $168.00.
Suscripciones al exterior de la República Mexicana. Por seis meses, correo aéreo de tercera clase: Norteamérica, posesiones de EUA, Centroamérica y Las Antillas: $10.00 US Dlls.; Sudamérica: $8.50 US; Europa: $15.00 US.

Las suscripciones por un año cuestan el doble de las de seis meses.

Cierre de esta edición: primero de se[ptiembre]

El sindicalismo universitario ante la ofensiva patronal

Paro nacional universitario el 10 de septiembre y elecciones en el SUNTU

Por Lucinda Nava Alegría*

El Consejo Nacional de Representantes (CNR) del Sindicato Unico Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU) se reunió los días 15 y 24 de agosto con los objetivos de analizar la problemática que enfrenta en estos momentos el sindicalismo universitario y de precisar la resolución en torno a la próxima elección del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SUNTU.

La asistencia de sólo dieciocho de veintisiete secciones del SUNTU a la primera sesión del CNR y de únicamente dieciséis a la segunda reflejó el proceso de dispersión y debilitamiento que se ha venido dando en el sindicalismo universitario como consecuencia de la política incorrecta de no luchar por el reconocimiento del sindicato nacional y de acatar la Ley JLP. Como ya lo analizamos en su oportunidad, el pasado congreso del SUNTU, celebrado en Puebla, no ofreció alternativas concretas de solución a los problemas que viven las secciones del SUNTU. En este sentido, la resolución de registrar al SUNTU como federación es algo tan ajeno a los intereses reales de los trabajadores universitarios y, al mismo tiempo, tan confuso que resulta hasta cierto punto natural la inasistencia de contingentes importantes de trabajadores al mitin del 14 de agosto en el que se "exigía" el registro de la Federación Sindical Unitaria Nacional de Trabajadores Universitarios (FSUNTU).

Los informes presentados por la mayoría de las secciones al CNR fueron muy ilustrativos de la magnitud de la ofensiva que como producto de la puesta en práctica de la "progresiva" Ley JLP se lleva a cabo contra el sindicalismo universitario. En Oaxaca, la sección se enfrenta al escamoteo de 210 plazas: el sindicato "blanco", la junta local y la patronal se han coaligado para dar el golpe. En Sinaloa, 2 mil plazas —académicas y administrativas— corren el peligro de desaparecer debido a los intentos reaccionarios por separar a las preparatorias de la universidad; además, como los trabajadores y estudiantes han emprendido un importante movimiento de resistencia, el gobierno estatal ha retenido el subsidio con el resultado de que más de 4 mil trabajadores no cobran sus salarios desde hace dos quincenas. En Durango, el compañero Carreón —actual Secretario de Finanzas del SUNTU— sigue preso injustamente y el gobierno estatal trata de condicionar su libertad o la posibilidad de darle una sentencia corta a que el sindicato no realice movilización alguna en la universidad de ese estado. En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) se enfrenta al gravísimo problema de que las autoridades, apoyándose en la Ley JLP, hayan entregado las comisiones de horarios del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) al sindicato "blanco" Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM). Esta medida atenta contra la voluntad mayoritaria de los profesores del CCH, ya que la casi totalidad de éstos votó por el STUNAM en el pasado recuento.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), por su parte, también enfrenta una situación extremadamente peligrosa, ya que las autoridades de la UAM intentan, de manera totalmente arbitraria, aplicar retroactivamente la Ley JLP para anular las 102 cláusulas del contrato colectivo relativas a la selección, la promoción, la contratación y la estabilidad en el trabajo del personal académico. En Yucatán, la sección no ha sido registrada por la junta local a pesar de que cumple con todos los requisitos formales; además, como consecuencia de una pugna entre el gobernador y el rector, el subsidio a la universidad está retenido y los trabajadores no han podido cobrar sus salarios. Tampoco la sección del SUNTU en Nayarit, que se encuentra muy debilitada después de haber sufrido durante un largo periodo la represión gubernamental, ha obtenido su registro. En Guerrero, desde enero no se entrega el subsidio que pactó la universidad con el gobierno federal, por lo cual los compañeros de la Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero (USCUAG) no han podido recibir los beneficios que conquistaron en la pasada revisión de su contrato colectivo. En Tlaxcala existe la amenaza de que las preparatorias sean separadas del Instituto de Educación Superior, se transformen en colegios de bachilleres y los trabajadores queden bajo el régimen del Apartado B del Artículo 123 constitucional.

Estos hechos tan graves, denunciados en el CNR del SUNTU, demuestran claramente que la ofensiva del gobierno es global, que no sólo se está golpeando al sindicalismo universitario sino a todo proceso de democratización en las universidades. Es por esto que el gobierno se propone reducir en un cuatro por ciento el presupuesto destinado a las universidades y separar a las instituciones de educación media de las de educación superior, además de que ya desde ahora manipula los subsidios destinados a las universidades en donde se han dado procesos de democratización. En esta misma lógica represiva, por supuesto, se sitúan todas las disposiciones de la Ley JLP que ponen la selección, la promoción y la estabilidad en el trabajo del personal académico bajo el control de las burocracias universitarias, pues de esa manera éstas y el propio gobierno mantienen el control sobre el contenido y los objetivos de la educación universitaria.

Realmente fue muy interesante constatar cómo, a la luz de la cruda realidad, los representantes de las distintas secciones al CNR —y no precisamente los que han mostrado oposición a la línea política del CEN— sacaron conclusiones en el mismo sentido de los puntos que desde hace bastante tiempo han sido ejes de definición de las corrientes de oposición en el SUNTU. Así, varios delegados expresaron que "el SUNTU ha perdido su iniciativa política" y que "es necesario responder a la agresión con una acción de fuerza a nivel nacional"; incluso, se llegó a decir que "hay que luchar por derogar la Ley JLP". Este legítimo sentimiento de indignación permitió que se aprobara por unanimidad la iniciativa de realizar el próximo 10 de septiembre una huelga nacional de veinticuatro horas. Se acordó que para llevar a cabo esta acción las secciones emplazaran formalmente por solidaridad y violaciones, y que se constatara el próximo 5 de septiembre, en el CNR, si la mayoría de las secciones había aprobado la iniciativa de la huelga.

Es prácticamente seguro que el emplazamiento será rechazado por las autoridades del trabajo. También podría darse el caso de que, debido al proceso de dispersión del sindicalismo universitario, para el 5 de septiembre no todas las secciones hayan tomado el acuerdo de ir a la huelga. Creemos que si al menos las secciones más fuertes están dispuestas a ir a la huelga ésta deben estallarla. Suspender la realización de esta medida de fuerza, después del largo periodo de desmovilización que ha vivido el SUNTU, sólo servirfa para desmoralizar más a los trabajadores universitarios en relación al proyecto del sindicato nacional y para envalentonar aún más a la patronal universitaria.

Finalmente, el CNR tomó el acuerdo de procesar la elección del próximo Comité Ejecutivo Nacional del SUNTU. Fue muy saludable que el CEN actual no insistiera en su propuesta inicial de realizar las elecciones durante septiembre y los primeros días de octubre. Correr cuarenta días la celebración de las elecciones fue una decisión acertada por parte del CNR, pues así podrá prepararse sin distracción la huelga del 10 de septiembre, será posible contar con una mayor participación de los trabajadores —ya que en septiembre muchas universidades están en periodo de vacaciones— y, sobre todo, habrá tiempo suficiente para que el SITUAM resuelva, mediante referéndum, si se queda o se sale del SUNTU; si el resultado del referéndum es positivo, el SITUAM podrá participar en el proceso electoral.

La elección del próximo CEN del SUNTU es una cuestión de bastante importancia, no sólo porque por primera vez se aplicará el principio de la representación proporcional a este nivel, sino porque esta dirección tendrá como tarea fundamental, si no se quiere liquidar al sindicalismo universitario, retomar la lucha por imponer el reconocimiento del SUNTU y la contratación colectiva nacional. ■



Precisamente, el abandonar la lucha por el SUNTU y crear la artificial FSUNTU ha significado una renuncia a derechos de los trabajadores universitarios.

* Lucinda Nava es la Secretaria de Trabajo Femenil del Sindicato de Trabajadores de la UNAM.

No estalló la huelga en Kelvinator

La huelga que debía haber estallado el 31 de agosto en la empresa Kelvinator fue conjurada porque los trabajadores obtuvieron el treinta y cinco por ciento de aumento salarial, aunque no se solucionó el problema de las violaciones al contrato.

El sindicato del Inmecafé, desarmado en la revisión

Por Salvador Ruíz Fierro

Durante la última semana de agosto se realizó un nuevo Pleno Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Café (SNTIMC). En esta reunión se analizó en qué grado ha avanzado el sindicato en la revisión del convenio laboral con la empresa. De los informes vertidos por los dirigentes nacionales y dos secretarios seccionales que participan en la revisión del convenio se desprende que se ha obtenido muy poco, y que la política que está empleando el sindicato en esta revisión no ha sido la apropiada y ha dado margen a que exista el riesgo de retroceder en lo que se refiere a avances fundamentales ya conquistados en revisiones anteriores.

Dirigentes seccionales que participan en la negociación apuntaron claramente que el sindicato "ha sido muy débil. El Inmecafé, por su parte, se ha mostrado intransigente desde el principio...debemos tomar una serie de medidas más enérgicas para realmente poder aspirar a conseguir alguna mejoría".

Es ahí donde expusimos nuevamente nuestros puntos de vista en el sentido de que es necesario respaldar las negociaciones con la presencia física y organizada de los trabajadores. Esto lo habíamos expuesto ya en julio, cuando se elaboró la política a seguir. Sin embargo, en esa ocasión la mayoría aprobó la línea del Comité Ejecutivo Nacional, consistente en "no provocar al Inmecafé", "hacer las cosas de una manera madura" y no llegar a un enfrentamiento con Inmecafé "que pudiera tener consecuencias desfavorables para el sindicato".

Era de esperarse que, viendo el escaso avance logrado con esta táctica, el pleno nacional decidiera actuar enérgicamente. No obstante, la mayoría volvió a aprobar la propuesta del comité ejecutivo que consiste en "dar un plazo razonable" a Inmecafé para que reconsidere su actitud y después presionarlo de alguna manera.

Como dijimos, con esa política solamente se están arriesgando conquistas anteriores y existe el peligro real de perderlas. ■

El informe presidencial no consigue ocultar la crisis

Por Roberto Iriarte

El Quinto Informe de Gobierno es, en realidad, el último informe de López Portillo con alguna repercusión. En este sentido, el informe del primero de septiembre, más que proponerse nuevos objetivos, constituye un balance de los cinco años de gobierno del actual presidente.

Sin embargo, las cifras presentadas y la imagen resultante del informe no corresponden a la realidad, razón por la cual, pese al triunfalismo con que presenta el presidente los resultados de su gestión, el conjunto del informe está marcado profundamente por un tono defensivo.

López Portillo inició su informe reconociendo la existencia de una crisis económica mundial expresada en una recesión acompañada de una inflación generalizada. Esta crisis hará que en el presente año el crecimiento del producto en los países industrializados sea de aproximadamente uno por ciento. Esta situación restringe el mercado mundial y crea desajustes comerciales entre las diversas naciones. Las más afectadas son y serán, obviamente, las que se encuentran en una situación de subdesarrollo. Y si bien los países productores de petróleo son menos afectados por la crisis, no por ello son inmunes a ella.

Pero López Portillo afirmó categóricamente que el desarrollo de México es una excepción. Esta afirmación la basa en los índices de crecimiento económico, que arrojan un promedio anual superior al ocho por ciento (aunque otras fuentes lo ubican en un siete por ciento). Posteriormente, dedicó gran parte del informe a dar cifras que, supuestamente, demuestran los "avances" logrados en estos cinco años. Sin embargo, dicho crecimiento es muy cuestionable.

En primer lugar, el crecimiento económico promedio alcanza el porcentaje señalado debido a un aumento registrado en 1979 que se extendió a parte del año siguiente. Este aumento se enmarcó en una recuperación mundial desigual y vacilante que tuvo sus efectos en el país. En éste, no obstante, se registró un aumento mayor al de gran parte del mundo capitalista debido a la explotación indiscriminada del petróleo, a su exportación masiva y al estímulo que estas circunstancias dieron al desarrollo industrial nacional. Pero en la segunda mitad de 1980 se empezaron a expresar los síntomas de una nueva recesión mundial, tales como la disminución del consumo de energéticos y la retracción de la producción en los países industrializados; las medidas proteccionistas que éstos toman —principalmente, Estados Unidos—; la consecuente disminución del intercambio comercial, y del precio de las materias primas y los energéticos; la reducción del gasto público norteamericano y las elevadas tasas de interés impuestas al dólar para proteger la economía estadunidense.

En México esta nueva recesión se ha expresado espectacularmente en la reducción del precio del petróleo, a lo que se suma la reducción del precio mundial de materias primas como el uranio, el café, el algodón, el azúcar, la plata y varios minerales más. Esto significa que México ha dejado de percibir miles de millones de dólares de divisas.

Los efectos de esta nueva recesión mundial se empezaron a sentir a fines del año pasado con una disminución de las exportaciones y un aumento del desnivel en el intercambio comercial internacional, y fueron ampliamente notorios a partir de la reducción del precio del petróleo en junio pasado.

En segundo lugar, estos efectos de la recesión mundial se combinaron con las características estructurales del país: una economía cuyo eje es la explotación y exportación del petróleo; una industria y una agroindustria dominadas por las multinacionales y la burguesía nacional asociada a ellas; una dependencia económica, tecnológica y financiera de la economía nacional con respecto a la estadunidense; una economía subsidiada por el gobierno y las empresas estatales, y orientada fundamentalmente a la exportación; y una reducción del producto agropecuario en los años pasados que obligó a aumentar la importación de alimentos.

Esto ha provocado que el panorama económico nacional sea muy diferente del descrito por López Portillo en su informe. La realidad es que, como decíamos, han habido un descenso de las exportaciones y una baja del precio de las materias primas en el mercado mundial que se expresan en un déficit creciente en la balanza comercial. Además, la deuda externa ascenderá este año a cerca de 41 mil millones de dólares, el doble de la deuda existente en 1976.

En tercer lugar, si bien el crecimiento económico no ha sufrido graves descensos, éste ha sido bastante artificial y desigual, pues se basa fundamentalmente en la producción de petróleo, la cual creció en 1980 a un ritmo del 17.5 por ciento. Además, el crecimiento se ha mantenido gracias a una política inflacionaria del gobierno, que otorga créditos y subsidios estatales con dinero inflacionario proveniente, fundamentalmente, de las divisas petroleras y de créditos del exterior. Esto provoca una inflación galopante y crónica —que tiene un índice de 32.5 por ciento, en comparación con el doce por ciento que se da en Estados Unidos— y, por lo tanto, una devaluación del peso —que actualmente se cotiza a veinticinco pesos por un dólar, siendo que su valor real es de treinta y tres pesos por dólar—; si el peso no desciende a su valor real es porque el estado lo sostiene con inversiones en dólares.

Otro índice del carácter artificial y desigual del crecimiento económico lo aporta el hecho de que la manufactura —cuyo índice de crecimiento marcaría la pauta de un crecimiento real— se ha rezagado y ha crecido solamente en un seis por ciento, por debajo de su nivel en los últimos dos años. Una causa es la retracción del mercado mundial, que ha provocado una disminución en la exportación de manufacturas, y otra es la propia retracción del mercado interno ante la crisis mundial. El sector minero, por su parte, ha experimentado un crecimiento por debajo de lo previsto. Igual fenómeno se observa en la producción agropecuaria, que aunque creció en un 4.5 por ciento este año apenas se está recuperando de la crisis de los últimos años y ve disminuir su participación en el producto interno bruto. Se prevé que para este año se importarán ocho millones de toneladas de alimentos.

En cuarto lugar, el crecimiento económico ha provocado unas mayores concentración y centralización del capital, lo que contradice el supuesto objetivo gubernamental de distribuir la riqueza. En cinco años de administración de la crisis y de "recuperación" de la misma, las utilidades capitalistas se han elevado, en promedio, en un 63.2 por ciento anual, mientras el salario nominal aumentó solamente a un ritmo del 17.8 por ciento anual. Las ochenta y dos empresas más importantes aumentaron sus utilidades en 84.2 por ciento en 1977, en 45.5 por ciento en 1978 y en 73.1 por ciento en 1979; los bancos las aumentaron en 270 por ciento de 1977 a 1980.

Por su parte, la población explotada vio disminuir dramáticamente sus ingresos. Entre 1977 y 1980, el salario perdió el veintidós por ciento de su capacidad de compra debido a los topes salariales y a la inflación. Los trabajadores se han visto reducidos a una situación de subsistencia: de su salario dedican el cuarenta por ciento a gastos de vivienda y el cincuenta por ciento, a alimentos. De 1976 a 1979, los trabajadores han visto reducida su participación en el ingreso nacional del 45.8 por ciento al 41.7 por ciento. Existe, entonces, una desigualdad cada vez mayor en el reparto de la riqueza. Un millón de familias acapara la mitad de la riqueza creada, mientras el sesenta por ciento de las familias recibe solamente el 21.9 por ciento del ingreso nacional y el veinte por ciento de las familias más pobres obtiene solamente el 2.9 por ciento de dicho ingreso.

Entonces, es completamente falso que ha aumentado el ingreso familiar de los trabajadores y que existe una mayor distribución de la riqueza. Lo mismo sucede con el empleo. Aun aceptando como cierto que, como afirmó López Portillo en su informe, han sido creados 3 millones 250 mil nuevos empleos en estos últimos cinco años, la realidad es que el desempleo aumenta. Muchos de los nuevos empleos han sido en obras de infraestructura realizadas por el estado y/o empresas contratistas, empleos que tienen un carácter eventual y no, como asegura el presidente, "estable". Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social registra solamente como nuevos derechohabientes a poco menos de un millón 600 mil personas, menos de la mitad de lo que declaró López Portillo. La modernización tecnológica de la industria para lograr un aumento de la productividad crea un mayor desempleo. En igual sentido actúa la crisis al llevar a las empresas medianas y pequeñas a cerrar o a disminuir el número de trabajadores (durante la fase más aguda de la crisis, un millón de trabajadores fueron despedidos). La Secretaría del Trabajo prevé para 1982 la existencia de un millón de desempleados y ocho millones de subempleados, lo que equivale a poco menos del cincuenta por ciento de la población económicamente activa. López Portillo, por su parte, se atreve a afirmar que el desempleo abierto en 1980 era del 3.5 por ciento, ¡la mitad del existente en los países industrializados!

Es obvio, entonces, que el crecimiento económico del que se ufana el gobierno es bastante cuestionable. Por una parte, es producto de la recuperación parcial y vacilante que se dio a finales de los setentas, y se sustenta fundamentalmente en la producción y exportación del petróleo (de 2.3 millones de barriles producidos diariamente, se exportan actualmente un millón 100 mil barriles diarios, es decir, el cuarenta y seis por ciento de la producción). Esta recuperación llegó a su término y los efectos de la recesión mundial ya han empezado a dejarse sentir. Por otra parte, dicho crecimiento ha tenido, lógicamente, un solo beneficiario: el capital nacional e imperialista.

En síntesis, el informe presidencial refleja las contradicciones del estado. Expone una política económica que ha beneficiado al capital pero al mismo tiempo le ha restado consenso social a su estado. Contra lo que ha venido diciendo el gobierno de que gracias al petróleo se propiciaría un desarrollo económico y político independiente, los resultados son una mayor dependencia con respecto al capital imperialista. Una política económica diseñada para sortear la crisis ha generado a su vez las bases para una mayor agudización de la nueva crisis que se vive. Queriendo salir de la crisis que estalló espectacularmente en 1976, el gobierno de López Portillo ha terminado por caer en el mismo lugar, pero en una situación más difícil en cuanto a su dependencia del imperialismo y al cuestionamiento por parte de las luchas sociales al estado que representa. ■

La realidad contradice...

(Viene de la portada)

promoviendo la intervención militar de otras dictaduras títeres —por lo tanto, regionalizando las confrontaciones armadas— le parece al gobierno mexicano que sólo puede acercar más aún la revolución a nuestras propias fronteras. Por ello es que trata, aun oponiéndose en algunos casos al imperialismo norteamericano —que no a todo el imperialismo, pues países como Francia comparten su táctica—, de encontrar una "salida negociada" al conflicto en El Salvador que pueda desactivar la revolución.

Por ello es que, precisamente, reconoce al FMLN-FDR sólo como una "fuerza política representativa", es decir, como una fuerza política que debe ser considerada para una negociación que ponga fin al conflicto. Además, mientras reconoce al FMLN-FDR, el gobierno mexicano continúa enviando petróleo a la junta y brindándole otro tipo de ayuda. En cambio, no brinda una ayuda concreta al FMLN-FDR.

Lo mismo sucede con Cuba. JLP dice apoyarla contra los hostigamientos del imperialismo, pero al mismo tiempo aceptó sin más su exclusión del llamado diálogo Norte-Sur.

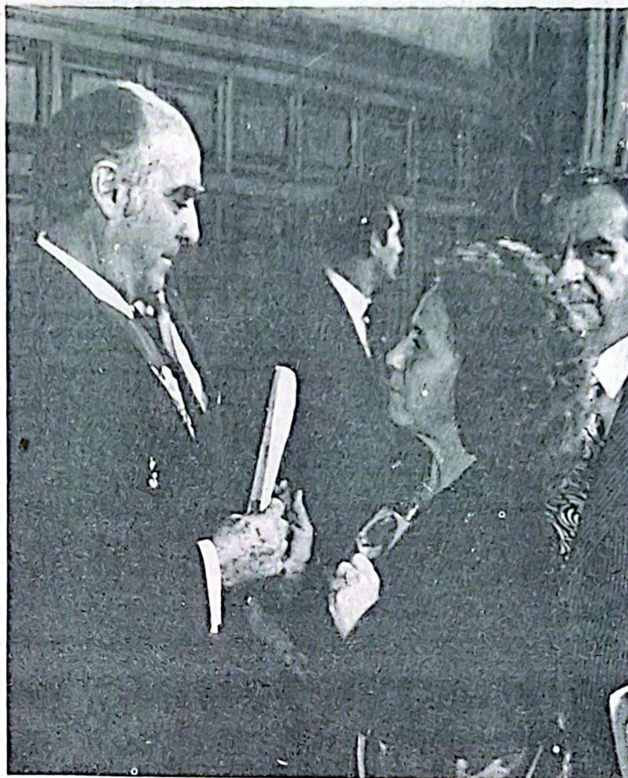
Aún más, López Portillo no dijo una sola palabra con respecto a uno de los más importantes problemas de los últimos meses: la expulsión de miles de guatemaltecos que habían venido a nuestro país en busca de refugio. El gobierno los entregó criminalmente en manos de sus verdugos. Aunque tenga problemas con la dictadura guatemalteca por su postura sobre El Salvador o sobre Belice, el gobierno mexicano mantiene una estrecha colaboración con el régimen de Lucas García en lo que a los refugiados y los revolucionarios guatemaltecos se refiere.

Por si fuera poco, la propia situación de los trabajadores mexicanos indocumentados en Estados Unidos no recibió ni la más mínima mención en el informe presidencial. Tal parece que el gobierno mexicano no tiene el menor interés en ellos y que aprueba el "plan Reagan" sobre indocumentados, que está diseñado para justificar y perpetuar la superexplotación, la discriminación, los malos tratos y las deportaciones masivas contra aquellos mexicanos que se ven obligados a cruzar la frontera en busca de trabajo.

Como en el terreno político, en el terreno económico López Portillo pretendió dibujar un país que no existe. Por más que lo quiera negar, la crisis económica está a flor de tierra. La Reforma Política sólo ha sido la raquítica contraparte de la estrategia fundamental del gobierno: la austeridad. Los cinco años de gobierno de López Portillo han significado la "recuperación" de las gigantescas ganancias de los capitalistas nacionales y extranjeros a costa de una mayor miseria de la población trabajadora. Y JLP promete que en su último año de gobierno todo seguirá siendo igual, y aún peor. ■

El PRT y Rosario Ibarra impugnaron con su presencia la farsa del informe

Se emplazó directamente al presidente a responder sobre los "desaparecidos"



Rosario Ibarra en el momento de entregar a JLP la carta del FNCR.

Cerca de las diez de la mañana del primero de septiembre partió del templo de San Hipólito —lugar donde desde el 28 de agosto el Frente Nacional contra la Represión (FNCR) había instalado un "plantón" en demanda, principalmente, de la presentación pública de más de 500 "desaparecidos" políticos— la delegación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) invitada oficialmente al Quinto Informe de Gobierno del presidente López Portillo.

La asistencia de la delegación del PRT al informe era altamente significativa no sólo por el hecho de ser ésta la primera vez que los revolucionarios eran invitados a un acto de esta naturaleza en virtud de los derechos legales que supieron conquistar, no sólo porque la delegación partía del "plantón" que se erigía desde ya como un reto y una contestación tangibles a la demagogia que habría de vertirse en el informe, sino porque la delegación incluía —además de a Manuel Aguilar Mora, Edgard Sánchez y Pedro Peñaloza, dirigentes del PRT— a la compañera Rosario Ibarra de Piedra, incansable luchadora contra la represión gubernamental, dirigente del FNCR y candidata del PRT a la presidencia de la república.

Antes de que saliera la delegación del "plantón", cada uno de sus integrantes se colocó en el pecho la fotografía de un "desaparecido" político: la señora Ibarra, la de su hijo; los tres restantes, las fotografías —escogidas al azar— de otros tantos "desaparecidos" políticos. Asimismo, la comisión partió con la responsabilidad de entregar personalmente al presidente López Portillo una carta firmada por los familiares de los "desaparecidos" políticos en la que, precisamente, exigían una respuesta inmediata y congruente a dicho problema.

De esta forma, la asistencia al informe se convertía, junto con el "plantón", en un mentís al gobierno y una demostración del uso que el PRT da a su registro legal.

Quizás por ello, a partir del momento mismo en que la delegación del PRT partió del templo de San Hipólito dio comienzo —en abierta contradicción con el carácter oficial de la invitación— el hostigamiento policiaco a la misma: inmediatamente, cuatro vehículos —un Ford Galaxie LTD azul, sin placas; un Ford Maverick café, placas 341 BTV; un Volkswagen Brasilia azul, placas 704 BRZ; y un Renault verde, placas 548 AKW— en cuyo interior iban más de diez agentes de la policía, algunos de los cuales mostraban ostentosamente sus walkie-talkies, materialmente se pegaron al automóvil en el que iba la delegación del PRT. En su afán de no separarse del mismo ni un solo metro, uno de los agentes que iba en el Ford Maverick ordenó al conductor del vehículo en el que íbamos miembros de la Oficina de Prensa del PRT y de **Bandera Socialista** que se detuviera. Evidentemente, se hizo caso omiso de la arbitraria orden.

Del mismo modo, tan pronto como la comisión del PRT llegó al Palacio Legislativo, todos los agentes descendieron de los automóviles y la siguieron paso a paso hasta la entrada del mismo; una cámara de televisión filmó el arribo de la comisión, enfocando particularmente a la señora Ibarra.

La vigilancia no cesó cuando la comisión del PRT ingresó al Palacio Legislativo: a partir de ese momento, elementos del ejército se encargaron de la misma. Más aún, la vigilancia no quedó en tal; de nueva cuenta se tradujo en un abierto hostigamiento al impedirle a la comisión que ocupara el lugar que oficialmente le correspondía y enviarla a la planta alta del palacio, junto a los miembros... ¡de la "iniciativa privada"! Irónicamente, al principio de su informe el presidente López Portillo dio la "bienvenida" al PRT entre los partidos registrados. De la verdadera "bienvenida", en realidad, se estaba encargando la policía.

Una vez concluida la lectura del informe presidencial, la comisión del PRT intentó acercarse al presidente con el objetivo de entregarle la carta. Sin embargo, una vez más, el hostigamiento se hizo presente y se impidió a los miembros de la comisión acercarse a López Portillo.

Ante estos hechos, la delegación del PRT decidió trasladarse al Palacio Nacional para estar presente en el acostumbrado acto de salutación —más popularmente conocido como de "besamanos"— al presidente tras el informe —acto al que, de igual forma, la comisión estaba oficialmente invitada—, no para hacerse partícipe del mismo, sino con el objetivo específico de entregar personalmente la mencionada carta a López Portillo. Y, de nueva cuenta, durante el recorrido fue estrechamente vigilada por agentes de la policía. Al recorrer el breve tramo que mediaba entre el lugar donde estacionaron el vehículo y el Palacio Nacional, la vigilancia era tan prepotentemente cercana que los miembros de la comisión escuchaban claramente la información que los agentes transmitían por los walkie-talkies: "Acaban de atravesar 20 de Noviembre"; "Se dirigen a Palacio Nacional", etc.

Asimismo, cuando los miembros de la comisión del PRT llegaron a las puertas del Palacio Nacional, la primera condición que se les impuso para permitirles el acceso fue que retiraran de sus pechos las fotografías de los "desaparecidos" políticos. "No solamente nos quitan a los hijos —comentó con posterioridad la señora Ibarra—, ahora ni siquiera quieren que traigamos sus fotografías".

Más adelante, en el empeño de obstaculizar a toda costa los objetivos de la comisión del PRT y pretextando que "las damas deben pasar primero", se separó de la misma a la señora Ibarra, y se le hizo pasar sola y por delante.

Finalmente, Rosario Ibarra se plantó frente al presidente López Portillo y, ante la presencia de funcionarios públicos y medios de comunicación, le dijo:

"Señor presidente, yo no vengo a felicitarlo; vengo a reclamar. Traigo la enorme responsabilidad, el encargo de 500 mujeres mexicanas para que nos dé una respuesta, para que nos esclarezca el problema de los 'desaparecidos' políticos mexicanos."

Inicialmente, el presidente sólo alcanzó a sonreír; sonrisa que, recordó posteriormente la señora Ibarra, "más parecía un rictus amargo". Después, preguntó: "¿Usted es la señora Rosario Ibarra de Piedra?". La compañera Ibarra contestó de inmediato afirmativamente y, acto seguido, solicitó al presidente una audiencia para tratar ampliamente el problema de los "desaparecidos".

—"Ya veremos", respondió el presidente.

—"'Ya veremos' ¿cuándo?", insistió la señora Ibarra.

—"Ya veremos, ya veremos; tenemos que hablar", volvió a responder López Portillo.

—"¿Qué respuesta les llevo a las madres?", interrogó la señora Ibarra.

—"Ya veremos", repitió una vez más el presidente, e inmediatamente tomó del brazo a la señora Ibarra en señal de que la plática había concluido.

Esa actitud de eludir dar una respuesta con respecto a los "desaparecidos" ha caracterizado al gobierno mexicano. Pero, para su pesar, el movimiento democrático que exige su presentación se ha fortalecido e incluso este primero de septiembre se abrió paso hasta el propio presidente para que no quede duda —como no le ha quedado a la opinión pública— de que está emplazado a contestar.

La delegación regresó al "plantón" a informar de todo lo ocurrido. En una breve reunión de información y evaluación, Rosario Ibarra señaló que a pesar del hostigamiento policiaco, de los obstáculos, de las evasivas de López Portillo, la tarea de la delegación había sido cumplida. En efecto, la delegación logró llevar hasta el Palacio Legislativo la presencia del "plantón" que se pretendía ocultar y la demanda de la presentación de los "desaparecidos" políticos a la que el gobierno quisiera echar tierra; se logró entregar la carta en la que se reitera esta exigencia, rompiendo la tradicional ceremonia de "besamanos" frente a todos los presentes y los medios de comunicación; se sentó un importante precedente de la actuación de los revolucionarios en la legalidad; se consiguió, en fin, prolongar simbólicamente la jornada de lucha que se inició el 28 hasta el lugar mismo donde se protagonizaba la farsa de todos los primeros de septiembre.



Edgard Sánchez, Rosario Ibarra y Aguilar Mora, momentos antes de salir rumbo al Palacio Legislativo.

El FNCR salió fortalecido de la jornada de lucha de agosto-septiembre

Demostración de fuerza ante el gobierno y consolidación de la unidad

La jornada de lucha que desarrolló el Frente Nacional contra la Represión (FNCR) del 28 de agosto al primero de septiembre concluyó exitosamente. La jornada incluyó la manifestación y el mitin realizados el día 28 en la Ciudad de México, y una "parada" permanente en la iglesia de San Hipólito desde ese día hasta el primero de septiembre, cuando por la tarde se efectuó un mitin en el que se respondió al informe presidencial y se hizo el balance de las actividades desarrolladas por el "plantón".

Varias son las razones políticas que permiten concluir que la jornada fue exitosa y ha ayudado al fortalecimiento del FNCR.

Una jornada unitaria

La movilización desarrollada el 28 de agosto confirma la tendencia a la unidad y la centralización de las luchas que se observa últimamente, aun cuando estas luchas tengan generalmente un carácter defensivo, de resistencia a la política de austeridad y represión del gobierno. Después de todo un proceso de acercamientos, experiencias comunes y discusiones, se logró que la manifestación del FNCR fuera convocada también por la Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" (CNPA), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP). De hecho, la CONAMUP y la CNPA participaron con contingentes significativos en la manifestación, con lo que se selló la acción unitaria con las fuerzas del FNCR. El mitin que se realizó al final de la marcha, en el que hicieron uso de la palabra representantes de las tres coordinadoras, simplemente lo confirmó.

Evidentemente, la cristalización de esta unidad en la acción entre el FNCR y las coordinadoras antes mencionadas se ha visto impulsada por las mismas luchas de los trabajadores de la ciudad y el campo, y por su espíritu unitario. Pero también se debe a una orientación que hemos impulsado conscientemente diversas corrientes políticas revolucionarias al interior de estos movimientos para concretar la unidad de las luchas.

Experiencias comunes previas también ayudaron en este sentido, especialmente la marcha conjunta CNTE-CNPA del 12 de mayo y el apoyo decidido, y a veces decisivo, del FNCR a la huelga de hambre de los presos de la CNPA durante el mes de julio. El avance se nota incluso en el hecho de que ciertas actitudes —como la de que dirigentes de la CNPA pusieran objeciones a que la compañera Rosario Ibarra de Piedra hablara a nombre del FNCR en el mitin con el que culminó la marcha del 12 de mayo— hayan quedado definitivamente en el pasado.

Los divisionistas

La fuerza de la movilización y la unidad hizo que la marcha y el mitin del 28 atrajeran y obligaran a definirse a otras fuerzas, generalmente ausentes de estos movimientos. Por ejemplo, en la marcha del 28 se hizo presente un contingente de entre quince y veinte compañeros del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Además de que las dimensiones de este contingente hablan más de la fuerza del PMT que los discursos de Heberto Castillo, es interesante constatar la asistencia a una marcha que no es de las "obligatorias" —como la del 2 de octubre— de un partido que desde hace mucho tiempo abandonó las filas del FNCR.

Al mismo tiempo que se confirma cómo la fuerza de la movilización puede atraer a este tipo de fuerzas, también ahí se revelan sus temores



frente a una lucha que no pueden dirigir y que no permite conciliación alguna con el estado. Dos ejemplos nos permiten comprender lo anterior.

Al llegar la marcha a la esquina de Paseo de la Reforma e Hidalgo, los organizadores que se encontraban en la "descubierta" de la marcha decidieron aprovechar que la policía impedía el paso de la manifestación en dirección al Zócalo para realizar el mitin en el lugar que se había seleccionado para el "plantón": la iglesia de San Hipólito. Ciertamente, no se había hecho público el lugar donde se realizaría el "plantón". Este había sido determinado previamente en reunión cerrada por la coordinadora del FNCR, pero era un secreto a voces que el "plantón" ocurriría al término de la marcha. La coordinadora lo señalaría en el momento oportuno y los manifestantes confiaron en ella, aun cuando la marcha no siguió el recorrido prestablecido. Sin embargo, hubo quienes se asustaron ante esta decisión. Enrique Semo y el diputado Carlos Sánchez Cárdenas —respectivamente, del Partido Comunista Mexicano (PCM) y del Movimiento de Acción y Unidad Socialista (MAUS), organizaciones en proceso de fusión—, al darse cuenta del cambio de ruta de la marcha se salieron —frente a la policía— de la propia "descubierta" entre protestas y gritos que intercambiaron con los que se quedaban.

El otro ejemplo es más conocido. Se trata de la actitud de la dirección nacional del Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), que hizo pública una declaración en la que califica al "plantón" prácticamente como una provocación al gobierno, especialmente por ocurrir simultáneamente al reconocimiento de éste a los insurgentes salvadoreños, y en la que se muestra como sorprendida por el contenido de la marcha. En realidad, la declaración sólo muestra que la dirección del SUTIN se vió obligada a apoyar la marcha por la fuerza del movimiento, contra sus deseos. Siempre estuvo claro que la marcha no se realizaba principalmente en apoyo a la universidad de Sinaloa, sino en general contra la represión y especialmente en relación al problema de los "desaparecidos" políticos. Afortunadamente, una asamblea de los trabajadores del Centro Nuclear desautorizó, de hecho, a la dirección nacional del SUTIN. Igualmente, sectarios de todo tipo han querido justificar su actitud hostil e indiferente hacia la marcha y el "plantón" con el pretexto de que supuestamente estas acciones eran parte de una campaña del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) para promover la candidatura de Rosario Ibarra a la presidencia.

Las fuerzas del FNCR

Otro aspecto importante de la jornada, que acompaña al anterior, lo constituyeron las grandes confraternización y solidaridad expresadas entre las diversas fuerzas participantes, especialmente en el "plantón". En éste destacaron —además, por supuesto, del PRT— la Unión por la Organización del Movimiento Estudiantil (UPOME), la Organización Nacional de Estudiantes-Corriente Socialista (ONE-CS), Punto Crítico, la Tendencia Marxista Leninista (TML), el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) y el Comité Nacional pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, que garantizaron contingentes permanentes en el "plantón", y en las labores de difusión y agitación políticas.

Aun a pesar de las naturales rivalidades políticas entre diversos agrupamientos, fue posible actuar unidos y en un ambiente distinto al de otros años.

El caso más contradictorio es el del Partido Comunista Mexicano. Aun siendo parte de la coordinadora del FNCR, su participación en el "plantón" —después de haber asistido con un buen contingente a la manifestación del 28— se redujo a la presencia del delegado del PCM al FNCR. Fuera de eso, lo que además es ilustrativo, su participación se limitó a proponerse como mediador para conseguir una entrevista con López Portillo —que no pudo lograr— y a dos visitas al "plantón": la primera, del diputado Rincón Gallardo para informar de una plática con el Subsecretario de Gobernación, Gutiérrez Barrios, en la que este último señaló que no habría desalojo; la segunda, de una comisión de solidaridad de un grupo de ferrocarrileros encabezada por Valentín Campa. Para el PRT, a diferencia de la opinión de algunos compañeros, la inconsecuente participación del PCM en el FNCR no debe llevar a plantear que se le excluya. Por el contrario, debe continuarse buscando su efectiva incorporación o una definición más explícita de este partido.

El freno al desalojo

Es importante destacar que, a diferencia de lo ocurrido a los "plantones" realizados en años anteriores, esta vez se logró evitar la represión del "plantón" por parte del gobierno. De hecho, el FNCR estaba preparado para un eventual desalojo. Previéndolo, el FNCR había diseñado la respuesta para evitar la desorganización. Sin embargo, los días pasaron y el desalojo no ocurrió. En vez de la vía violenta, el gobierno optó por tender una columna de humo alrededor del "plantón", un cerco de silencio que impidiera que la acción fuera conocida y tuviera mayores repercusiones. Con el silencio de la prensa, la labor de las brigadas de información fue más difícil, pero logró dar a conocer la acción. Significativamente, por cierto, el único desplegado que hizo referencia al "plantón" además de los del FNCR fue el de la dirección del SUTIN... para condenarlo y apoyar al gobierno.

Sin embargo, si el gobierno no optó por el desalojo como en otros años no fue simplemente porque prefiriera el cerco de silencio. De hecho, lo hizo así porque no le quedaba mejor alternativa. El cerco de silencio también se había aplicado en otros años, pero para preparar la represión. Ahora, a pesar del constante hostigamiento de la policía, no pudo lanzarla.

Lo que detuvo las manos del gobierno fue una compleja articulación de factores que tienen qué ver con algunos de los elementos que hemos señalado. Por un lado, el apoyo político y el respaldo logrados a favor del FNCR por las coordinadoras de masas; la gran unidad mostrada por las fuerzas participantes en este movimiento, que aseguraban una importante respuesta centralizada —lo que confirma la tendencia del FNCR a convertirse en el aglutinador de las coordinadoras de masas— si la represión ocurría. Pero también influyó la mejor posición en que se encontraba el FNCR esta ocasión. Evidentemente, la jornada estaba en mucho determinada por la proximidad del informe presidencial, el cual se exigía diera respuesta a las demandas del FNCR. En años anteriores el gobierno había podido reprimir. Ahora, sin embargo, algo cambiaba. Rosario Ibarra de Piedra, principal dirigente del FNCR, estaba invitada al informe presidencial como parte de la delegación del PRT.

Como se sabe, el PRT —debido a su reciente registro— disponía de cuatro lugares para escuchar el informe presidencial en la Cámara de Diputados. La dirección nacional del PRT decidió ceder uno de esos lugares a la compañera Ibarra de Piedra. De acuerdo a los trámites que realiza la Cámara de Diputados, el PRT notificó la composición de su delegación desde el primero de agosto. Desde entonces, el gobierno sabía quién iría al informe en la delegación del PRT. Así que, o vetaba el derecho del PRT a conformar como quisiera su delegación, o lo respetaba y se veía en mayores dificultades para reprimir al "plantón". Para no tener que enfrentar la situación de tener como invitada a la dirigente de una lucha reprimida unos días antes, el gobierno se vio obligado a usar la táctica del cerco de silencio durante los días del "plantón" y en el informe mismo, en el cual no hizo la más mínima referencia al asunto.

Sin embargo, todo lo anterior permitió que el FNCR saliera de la jornada con sus fuerzas indemnes, sin haber sido reprimido, y más cohesionado y fuerte para continuar la movilización y la lucha. Por eso, el mitin de respuesta al informe presidencial, que estuvo a cargo precisamente de Rosario Ibarra de Piedra, decidió al mismo tiempo levantar el "plantón" en condiciones de fuerza. Concluyó así una jornada y se inició la siguiente, que deberá desarrollarse en vistas a la movilización del 2 de octubre. Desde ahora empezamos a prepararla. ■

El "plantón" de San Hipólito, la contraparte del informe

En un mitin, el FNCR dio la verdadera respuesta al informe

Por A. del Moral

El primero de septiembre, mientras se desarrollaba la farsa del Quinto Informe de Gobierno de López Portillo en el flamante Palacio Legislativo, un "plantón" instalado desde días antes en el templo de San Hipólito por numerosas organizaciones, y familiares de presos y "desaparecidos" políticos se erigía como la contraparte, como el mentís, como la respuesta viva y tangible, a la demagogia vertida en el informe. Precisamente, el "plantón" habría de levantarse la tarde de ese mismo día con un mitin en el que además se dio una respuesta explícita al informe de López Portillo.

En efecto, el pasado 28 de agosto, después de realizar una manifestación que reunió a más de 20 mil personas, el Frente Nacional contra la Represión (FNCR) instaló un "plantón" en el templo de San Hipólito de la Ciudad de México para exigir la presentación pública de más de 500 "desaparecidos" políticos, la amnistía para los más de cuarenta presos políticos que aún quedan en el país, y el cese de la represión contra el movimiento obrero, campesino y popular.

El primer problema que el FNCR enfrentó para instalar el "plantón" fue el hecho de que el párroco que en esos momentos oficiaba misa ordenó el desalojo inmediato de quienes ya empezaban a ocupar el atrio, así como el cierre de las puertas de la iglesia.

Finalmente, se obtuvo la autorización para instalar el "plantón" en el atrio de la iglesia y el permiso para que las mujeres, particularmente las madres de los "desaparecidos", durmieran en el interior del templo; también quedó abierta la posibilidad de que, ante la eventualidad de un desalojo policiaco, quienes en ese momento estuvieran presentes en el "plantón" pudieran refugiarse en el templo.

De esta forma, el "plantón" quedó instalado. En él participaron miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), del Grupo Lambda de Liberación Homosexual, de Punto Crítico, de la Unión por la Organización del Movimiento Estudiantil (UPOME), de la Organización Nacional de Estudiantes (ONE), de la Juventud Comunista Revolucionaria (JCR), de la Corriente Socialista (CS), y de los frentes estatales contra la represión de Guerrero y Sinaloa, así como de algunas organizaciones integrantes de la Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" (CNPA) —tales como la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), la Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente (CCRI), la Unión Campesina Independiente (UCI), la Unión Ejidal "Lázaro Cárdenas" (UELC) de Nuevo León, el Comité de Defensa Popular (CDP) de Chihuahua y el Frente Popular de Zacatecas (FPZ)— y de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) —como la Unión de Colonias Populares (UCP)—, y una delegación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Una vez instalado el "plantón", la coordinadora nacional del FNCR inició la organización de las actividades necesarias para sostenerlo, protegerlo y difundirlo. De esta forma, se nombraron comisiones de orden en las que participaron todas las organizaciones. Asimismo, se constituyeron comisiones de vigilancia que —colocadas en la puerta del atrio, y en las puertas frontal, trasera y laterales de la iglesia— permitieron controlar la entrada y salida de personas.

Las brigadas de propaganda y "boteo" organizadas ahí mismo permitieron dar a conocer la existencia del "plantón", sus motivos y objetivos; romper, en la medida de lo posible, el vacío informativo que le hicieron los distintos medios de comunicación; y obtener los medios económicos suficientes para sostener esa difusión.

La coordinadora nacional del FNCR se reunía constantemente para hacer balances de la "parada" y para considerar las actividades a realizar. Por las noches, en asambleas generales celebradas dentro de la iglesia, todos los presentes en el "plantón" discutían los planes.

Pero el "plantón" no sólo fue medidas organizativas, actividades y reuniones; también fue convivencia entre las diferentes organizaciones participantes que permitió generar un ambiente de unidad y respeto.

Sin embargo, por otra parte y aunque finalmente no hubo desalojo, el "plantón" fue víctima de un constante hostigamiento. Así, durante la primera noche —en un claro intento de intimidación que por momentos hizo pensar en la inminencia del desalojo— el cuerpo de granaderos apostado en las inmediaciones del templo realizó varios movimientos y grupos de hasta cuatro patrullas de la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPT) pasaron una y otra vez frente al templo con la sirena abierta. Del mismo modo, desde esa noche y hasta la tarde del primero de septiembre rodearon al templo de San Hipólito cerca de veinte vehículos con agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que desde sus posiciones informaban a sus superiores de las actividades del "plantón".



Al mediodía del 29 de agosto, la intentona intimidatoria alcanzó su momento de mayor tensión y tirantez. A esas horas, al frente de un numeroso grupo de granaderos y agentes de distintas corporaciones policiacas, se presentó en el "plantón" el teniente coronel Arturo Marbán, Subdirector Operativo de la DGPT. En una actitud más que prepotente, Marbán increpó a quienes en ese momento se encontraban en el "plantón": "Si saben que van a ser desalojados, ¿por qué hacen estas cosas?".

Inmediatamente, la compañera Rosario Ibarra de Piedra respondió que el "plantón", como acto público, se encontraba dentro de todas las normas constitucionales.

Con una actitud aún más agresiva, Marbán gritó: "Pues les guste o no les guste, los vamos a desalojar".

En esos momentos, intervino Pedro Peñaloza —representante del PRT en el FNCR—, quien le hizo notar a Marbán que para llevar a cabo el desalojo requería de una solicitud expresa del sacerdote responsable del templo de San Hipólito, o bien de una orden directa del presidente de la república o de la Procuraduría General de la República.

El intercambio de palabras subía cada vez más de tono y el ambiente se hacía más tenso; a estas alturas, todos los miembros de las distintas corporaciones policiacas que encabezaba Marbán habían empezado a gritar "¡'Madriza', 'madriza'!", en virtual espera —y, hasta cierto punto, exigencia— de la orden para iniciar el desalojo.

No obstante, la firme decisión de continuar sosteniendo el "plantón" mostrada por quienes en esos momentos se encontraban en el atrio del templo de San Hipólito terminó, primero, por echar abajo la prepotente actitud de Marbán y, en seguida, por hacerlo retroceder en su intentona represiva.

Afortunadamente, ahí paró el hostigamiento abierto al "plantón".

Más adelante, ante la consideración de que los objetivos políticos del "plantón" habían sido cumplidos, la noche del 31 de agosto el FNCR acordó levantarlo, con la realización de un mitin, la tarde del día siguiente, esto es, unas horas después del Quinto Informe de Gobierno del presidente López Portillo.

El mitin se inició aproximadamente a las 18:00 horas y contó con la participación de cerca de 2 mil personas. Además de sellar el levantamiento del "plantón", el mitin se constituyó en una respuesta al informe presentado unas horas antes por el presidente López Portillo. De igual forma, permitió un balance de las actividades del FNCR a dos años de su constitución.

Correspondió a Rosario Ibarra responder al informe. De entrada, la señora Ibarra lo definió como un informe "políticamente defensivo y pobre" que "descalificó sin argumentos las críticas". La señora Ibarra señaló que el informe ocultó graves problemas nacionales como los síntomas de la recesión económica, la posibilidad de una nueva devaluación del peso mexicano, la restricción del gasto público, la inflación, la especulación y el acaparamiento, el creciente desempleo, etc., problemas éstos que en los hechos han implicado y generado una mayor miseria para la población trabajadora. Asimismo, la señora Ibarra apuntó que el informe ignoró importantes demandas de amplios sectores de la sociedad mexicana como lo son, precisamente, las levantadas por el FNCR.

La señora Ibarra apuntó también que resulta contradictorio que, por una parte, el gobierno mexicano reconozca al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y al Frente Democrático Revolucionario de El Salvador y, por otra, continúe enviando petróleo a la junta militar salvadoreña, lo mismo que por una parte diga apoyar la causa de la revolución cubana y por otra permita la exclusión de la delegación cubana de la llamada Reunión Norte-Sur. Igualmente, la señora Ibarra indicó que el informe eludió hacer referencia al "plan Reagan" sobre indocumentados y ocultó la expulsión, por órdenes del gobierno mexicano, de cientos de refugiados políticos guatemaltecos.

Posteriormente, habría de leerse un documento de balance de los dos años de actividades del FNCR.

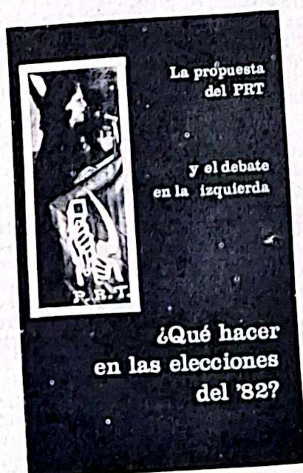
Finalmente, al concluir el mitin, el "plantón" se levantó con la convicción de todos los participantes de que es la movilización, como la jornada de lucha que se inició con la marcha del 28 de agosto y terminaba en ese momento, la que permitirá incorporar a nuevos y más amplios sectores a la lucha que impulsa el FNCR, y la única forma en que se alcanzará la solución a sus demandas.

En este sentido, la tarea que se ha impuesto el FNCR en lo inmediato es la organización de las movilizaciones del 2 de octubre —en conmemoración de la matanza de 1968— y del 10 de diciembre —Día Internacional de los Derechos Humanos—, en las que se espera avanzar aún más en la unidad del movimiento de masas contra la represión. ■

FOLLETOS BANDERA SOCIALISTA

de venta en

LIBRERIA NUESTRA AMERICA



Bajá California 71, Colonia Roma

México y Francia reconocen al FMLN-FDR

Un triunfo de la revolución salvadoreña y de la solidaridad internacional

Por Alvaro Laín

Los gobiernos de México y Francia han reconocido al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)-Frente Democrático Revolucionario (FDR) como "fuerza política representativa", lo que virtualmente constituye su reconocimiento como fuerza beligerante. Esto es una victoria indiscutible de la revolución salvadoreña y del movimiento de solidaridad internacional que se ha formado a lo largo de dos años, sobre todo en nuestro país.



¿Qué pasa en El Salvador?

Internamente, la situación salvadoreña se caracteriza por las sucesivas derrotas que el FMLN ha infligido al ejército de la junta, por la profunda crisis económica que afecta al país y por la crisis de poder en el seno de la clase dominante.

En efecto, después de la ofensiva general de enero lanzada por el FMLN, las fuerzas armadas desataron una sistemática y violentísima ofensiva contra las fuerzas guerrilleras; sin embargo, hasta el momento ésta no ha tenido como consecuencia una derrota de las fuerzas revolucionarias. Por el contrario, en una declaración de la Comandancia General del FMLN, fechada en El Salvador el 7 de agosto, se reporta que las fuerzas contrarrevolucionarias fueron derrotadas, en marzo y abril, en Guazapa, tras cincuenta y cinco días de combates; en mayo, en Morazán; y en junio y julio, en San Vicente y Chalatenango. El ataque combinado de los ejércitos salvadoreño y hondureño lanzado contra el FMLN los días 17 y 27 de julio no logró dominar a las fuerzas insurgentes e, igualmente, la ofensiva del 28 de julio y el 2 de agosto contra las fuerzas revolucionarias de Guazapa no logró sus propósitos.

A partir del 9 de enero, las fuerzas revolucionarias han venido desarrollando una ofensiva sistemática que ha llevado a la ocupación de poblaciones, la paralización del cincuenta por ciento del sector eléctrico, el corte de carreteras, y emboscadas que han causado un grave daño a las fuerzas armadas y paramilitares. Todos estos reiterados fracasos y derrotas de las fuerzas de la junta ocurren a pesar del apoyo creciente de Estados Unidos y otros países a la dictadura, lo cual demuestra la capacidad de combate del FMLN. En la medida en que se ha venido desarrollando, la confrontación ha permitido sellar en la práctica la unidad de las fuerzas revolucionarias, al grado de que cada vez es más factible lanzar operativos militares unitarios capaces de golpear a fondo al enemigo. En este duro proceso se ha conformado ya la esencia fundamental del ejército revolucionario que se prepara para dar futuros combates de gran envergadura en el marco de ofensivas profundas por el poder.

Económicamente, la situación no es mejor para la junta. Según el informe antes citado, "El propio embajador Hinton ha reconocido que el Producto Nacional es un 25 por ciento inferior que en 1978, la inversión privada un 70 por ciento menor y las importaciones un 52 por ciento por debajo de aquel año". La situación para las masas trabajadoras es la peor en la historia moderna de El Salvador: el desempleo es generalizado y la represión indiscriminada contra la población alcanza niveles de genocidio.

La crisis de poder se ha vuelto a manifestar a través de la polémica establecida públicamente entre la empresa privada y los dirigentes de la democracia cristiana. La Alianza Productiva (AP) realizó un simposio desde donde atacó abiertamente a la política democristiana, al mismo tiempo que personeros de AP visitaban Washington para plantear la necesidad de incorporar a la junta a un representante de esta organización; se trataba, de hecho, de que la oligarquía tomara el control político de la situación. Esta posición fue rechazada por el imperialismo, y los voceros oficiosos del gobierno norteamericano apoyaron abiertamente a Duarte. Estados Unidos no tiene interés alguno en dejar al desnudo su política y así aislarse totalmente; no está dispuesto a desechar la máscara que para su intervención significa la alianza con la democracia cristiana internacional. Es evidente que la oligarquía ve que la maniobra juntista apunta hacia un fracaso estrepitoso —sin retorno— y que, si bien ahora busca un acuerdo o dar un golpe de estado con la aquiescencia de Reagan, más tarde —si fuese necesario— va a tratar de implementar su alternativa aun en contra de la voluntad del propio Reagan.

En estas condiciones la correlación de fuerzas, sobre todo a partir de enero, ha venido girando paulatinamente a favor de las fuerzas revolucionarias. La incapacidad de las fuerzas armadas para derrotar al FMLN, la profunda crisis económica y la crisis al interior de la clase dominante se combinan para generar una profunda debilidad de las fuerzas reaccionarias que cuenta a favor de las fuerzas de la revolución.

El marco internacional

En este momento se presenta en Centroamérica una coyuntura muy particular. Por un lado, Estados Unidos está planteando la militarización de la región. En este sentido, se han dado pasos importantes —el desalojo de la población; las visitas de grupos militares, de ingenieros, arquitectos, etc.— para construir una base militar en el Golfo de Fonseca y el ejército hondureño está siendo provisto de armamento moderno para "luchar contra el comunismo", como dijo Vernon Walters en Tegucigalpa hace pocos días. Además, oficiales hondureños entrenan a los somocistas que se encuentran en ese país para preparar una agresión a Nicaragua. La denuncia que los sandinistas han realizado en el sentido de que en este otoño se llevará a cabo la invasión debe tomarse muy en serio.

El ejército guatemalteco es, indudablemente, el mejor preparado para cumplir con las tareas de agresión a los procesos revolucionarios nicaragüense y salvadoreño. Sin embargo, se enfrenta a serios problemas internos dada la fuerte actividad de las organizaciones revolucionarias de la propia Guatemala. El guatemalteco es en este momento, entonces, el ejército más preparado de la región, pero a su vez el más vulnerable; de ahí que se encuentre en una relativa inmovilidad.

Como podemos ver, Honduras ocupa un lugar central para la lucha contra la revolución Centroamericana. En consecuencia, las fuerzas de la solidaridad tienen que fijarse como tarea primordial el neutralizar el papel que le ha asignado el imperialismo y que sus gobernantes tan gustosamente aceptan.

Lo anterior significa que el reconocimiento de los gobiernos mexicano y francés al FDR-FMLN se da en el marco de una profunda crisis regional que sólo va a tener salidas a partir de grandes confrontaciones sociales y militares. Para ello se prepara el gobierno mexicano con esta declaración, en tanto que este reconocimiento busca no tanto objetivos a corto plazo, sino cambiar la relación de las fuerzas para facilitar la estabilización de la región. De hecho, se trata de un anuncio dirigido no sólo al imperialismo, sino también al dictador guatemalteco Romeo Lucas García. Cuando los analistas de Reagan hablan de que esta declaración es una advertencia, lo dicen con razones fundamentadas: a México, a la burguesía mexicana, no le conviene la situación en extremo conflictiva que se da en Centroamérica ni, mucho menos, una guerra regional; se tienen demasiados problemas internos como para no hacer nada con respecto a una región en la cual Estados Unidos está entrando cada vez más en una confrontación en la cual va a resultar perdedor. Por eso, precisamente, es conveniente para el gobierno de México jugar a favor de una salida negociada a la crisis salvadoreña. Pero hay una razón más, y en modo alguno menos importante, tras la actitud del gobierno mexicano: la solidaridad que se ha generado en nuestro país a favor del proceso revolucionario salvadoreño y la que se generará, tal vez en mucho mayor medida, con el guatemalteco.

El papel de la solidaridad en esta victoria

En México se ha construido un amplio movimiento de solidaridad con la revolución salvadoreña como producto de dos años ininterrumpidos de trabajo por parte del Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño (CMSPS) y otras fuerzas que han confluido en organismos como el Frente Nacional de Solidaridad con El Salvador que hoy se ha constituido en Foro Permanente de Solidaridad con la Revolución Salvadoreña. Centenares de miles de personas en todo el país se han movilizado durante estos dos años en apoyo al pueblo salvadoreño; millones y millones de pesos han sido entregados a los revolucionarios salvadoreños como contribución generosa del pueblo mexicano —de sus obreros y campesinos, colonos y estudiantes— a ese pueblo en lucha. Este movimiento, independiente del estado mexicano, constituye una fuerza que, sin embargo, pesa sobre las decisiones del gobierno. La propuesta que el Secretario de Relaciones Exteriores llevó a Francia era la de reconocer un estado de beligerancia en El Salvador; el gobierno francés, que no ha dejado de ser imperialista, se opuso y "planteó una propuesta inaceptable para el gobierno de México puesto que le traería serios problemas internos", según han informado algunas fuentes, aunque no se ha dicho exactamente cuál fue la propuesta francesa. El hecho de que el gobierno de México tomara en consideración los problemas internos que se le crearían si aceptaba una propuesta menor que la solicitada por el FMLN —esto es, la de ser reconocido como fuerza insurgente— muestra que el movimiento de solidaridad que se ha formado en México tiene un peso importante para la toma de decisiones de esta naturaleza. Por ello afirmamos que el reconocimiento que se ha hecho del FMLN-FDR es también una victoria de la solidaridad y que ella es indispensable para que el pueblo salvadoreño alcance la victoria.

¿Cambia la solidaridad?

Esta es una pregunta que se ha venido haciendo en el movimiento de masas solidario. Hasta el momento, la solidaridad se ha mantenido al margen de acuerdos y componendas con el gobierno mexicano. Existen al interior del movimiento las clásicas corrientes proburguesas y proestatales que tratan de canalizar al movimiento a favor del gobierno para fortalecer a éste políticamente; estas corrientes siempre han existido y en otros casos, muchas veces, han cumplido con su papel de "institucionalizadoras" de los movimientos de solidaridad. En el caso de El Salvador, sin embargo, no han podido jugar ese rol, en primer lugar, debido a la política titubeante que al respecto de la revolución salvadoreña había venido teniendo el gobierno mexicano; y, en segundo lugar, porque cuando muy pocos creían en la revolución un grupo de compañeros apoyados por diversas organizaciones asumió un trabajo de solidaridad que, sin buscar enfrentamientos con el gobierno, estaba dirigido a las masas, a los obreros y campesinos, para que fueran ellos quienes brindaran directamente la solidaridad.

El reconocimiento del FMLN-FDR por parte del gobierno mexicano no modifica esa orientación, sino que la favorece. En efecto, existen condiciones más favorables para que el movimiento de solidaridad haga llegar una mayor ayuda al pueblo salvadoreño en lucha. Ese movimiento y las simpatías que en general tiene el pueblo mexicano hacia la revolución centroamericana han jugado un papel de primer orden para que el gobierno mexicano dé este paso; ahora, ese movimiento debe hacerlo ir más allá, debe obligarlo a ser consecuente con esta medida. De esta manera, hay que exigir al gobierno mexicano que busque activamente que otros países se unan a la declaración; que denuncie el genocidio que realiza la junta; que utilice todos los foros internacionales para tratar de detener la intervención de Estados Unidos; que corte toda ayuda que esté proporcionando a la junta, como el suministro de petróleo; que dé una solución favorable al problema de los refugiados de guerra que se encuentran en nuestro país; que presione a los organismos internacionales para que intervengan en el sentido de que también Honduras, Guatemala y Costa Rica reconozcan a los refugiados salvadoreños como refugiados de guerra, ya que éste es el status que adquieren todas estas personas con el

(Pasa a la página 9)

¿Por qué no fue JLP a Guatemala?

El reconocimiento al FMLN-FDR pesó más que la colaboracion contra los refugiados

Por Arturo Corona



Entre el gobierno mexicano y la dictadura guatemalteca existen puntos de colaboración pero también importantes discrepancias.

Sorpresivamente, el anunciado viaje de José López Portillo a Guatemala para entrevistarse con el dictador Romeo Lucas García fue, en el lenguaje diplomático, "pospuesto", sin que se haya fijado una nueva fecha de reunión.

Se dice que la posición adoptada por el gobierno mexicano —y reafirmada en el quinto informe— respecto a Belice es la causa de la postergación. La política del gobierno mexicano hacia Belice ha mantenido rasgos progresivos al defender el derecho de este país a la soberanía y la autodeterminación frente a los afanes expansionistas de la oligarquía guatemalteca, que de paso maneja el asunto de Belice para tratar de fomentar entre el pueblo de Guatemala, principalmente entre los sectores medios, una ola de histeria patriotera que le sirva de apoyo social interno, del que se encuentra tan necesitada ante el avance del proceso revolucionario.

Pero la posición de México sobre Belice era ya conocida desde hace tiempo, por lo que no es eso lo que explica la suspensión, "por mutuo acuerdo", de la visita. En realidad, detrás de esta decisión —sin que tenga mucha importancia el dilucidar de qué gobierno partió la iniciativa— se encuentra el reconocimiento del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)-Frente Democrático Revolucionario (FDR) de El Salvador, por parte de los gobiernos de México y Francia, como fuerza representativa y, por lo tanto, como interlocutor válido en cualquier intento de solución política para la guerra que libra el pueblo salvadoreño contra la dictadura y el imperialismo norteamericano.

En Guatemala también, fuerzas representativas de la lucha del pueblo contra la dictadura avanzan a grandes pasos en el proceso de liberación y se perfilan asimismo como una perspectiva real de poder, de manera que —tarde o temprano— el reconocimiento del FMLN-FDR repercutirá con fuerza en el proceso revolucionario guatemalteco. Es claro, entonces, que para la oligarquía guatemalteca y su garante, el imperialismo yanqui, la declaración conjunta de los gobiernos mexicano y francés representa un peligroso precedente; de ahí la furiosa respuesta de las dictaduras de América Latina y sus aliados, los gobiernos de la democracia cristiana, al paso dado por la diplomacia mexicana.

El trasfondo de la posición del gobierno mexicano lo encontramos en forma más general en el avance de las luchas revolucionarias en toda el área centroamericana y del Caribe, frente al cual el imperialismo norteamericano ha tomado un curso que el propio gobierno mexicano considera peligroso para sus intereses, tanto internos como externos. La administración Reagan quiere frenar la marea revolucionaria que sacude a esta región con una estrategia de choque que se basa en tres ejes fundamentales: la intervención del bloque de dictaduras latinoamericanas para aplastar militarmente a la insurgencia salvadoreña; el derrocamiento del régimen sandinista en Nicaragua por medio de la invasión de un ejército de ex guardias somocistas y mercenarios; y la adopción de una posición aún más dura contra Cuba, que incluye no sólo el reforzamiento del bloqueo económico y político sino también, y en alto grado, acciones de hostigamiento militar, sabotajes, etc. En otras palabras y como ahora se dice, se trata de "regionalizar", de extender a nivel regional, la estrategia contrarrevolucionaria, principalmente por medios militares.

El gobierno mexicano considera que esta política del imperialismo le acarrea graves repercusiones. En primer lugar, una mayor intervención del imperialismo y del bloque de dictaduras aliadas a él para apagar el incendio que prende ya en Guatemala, en nuestras propias fronteras, sin lugar a dudas alentaría en México una gran radicalización que comenzaría como un fuerte movimiento contra la intervención imperialista, pero que rápidamente se combinaría con las demandas propias de las masas mexicanas.

Por otra parte, el peligro de tener que enfrentarse al imperialismo ha sido medido por el régimen bonapartista mexicano en todas sus consecuencias. El gobierno mexicano tendría que recurrir al apoyo popular, a las movilizaciones de masas, y el uso de este método en las actuales circunstancias es algo que el régimen no está seguro de poder mantener bajo control. Prefiere, entonces, presionar desde ahora para desviar el conflicto en Centroamérica hacia vías menos peligrosas. Esto explica la envergadura de las decisiones de la política exterior mexicana, el que el gobierno se atreva a desafiar el curso de los planes imperialistas en el área centroamericana y favorezca así objetivamente a los movimientos revolucionarios en la región.

Sin embargo, en el caso de Guatemala, dicha política es contradictoria. Por un lado, se mantienen desacuerdos y fricciones pero, por otra parte, existe una actitud de franca colaboración —por lo demás ya histórica, pues no viene de ahora— con la dictadura guatemalteca, como lo evidencia la expulsión masiva de las oleadas de refugiados. De hecho, ese punto de colaboración era una de las bases de la cancelada reunión.

Hasta ahora, el gobierno mexicano ha respondido con un cerrado silencio a las inumerables protestas por la expulsión de refugiados de la zona fronteriza de Chiapas y no ha dado contestación a la solicitud hecha por las fuerzas representadas en la Comisión Promotora del Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Guatemalteco de que se levante la incomunicación en la que mantiene a los cuarenta y seis guatemaltecos a los que se dio asilo. Tampoco ha explicado públicamente el significado de la renuncia del Director de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, licenciado Gabino Fraga, a raíz de la expulsión masiva de refugiados guatemaltecos en julio pasado. En esa ocasión, dicha comisión había tomado la decisión de no expulsarlos y elaboraba planes para darles asistencia, pero el ejército mexicano, contradiciendo esta decisión que ya había sido hecha pública, obligó a centenares de familias guatemaltecas a abandonar el país y las dejó a merced de la sanguinaria dictadura de Lucas García.

Posteriormente se han publicado en el diario **Excélsior** algunos detalles de este caso que han dejado entrever la existencia en la Secretaría de Gobernación de fuertes pugnas internas cuyo epicentro sería la licenciada Diana Torres, Directora de Inmigración de la misma secretaría. Es cierto que son siniestros los antecedentes de la tal Diana Torres, quien ha mostrado una actitud represiva e inflexible hacia los asilados y exiliados latinoamericanos que hace sospechar incluso que es un verdadero contacto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y mantiene nexos con los grupos fascistas mexicanos que usan la táctica de colocar a sus miembros en puestos claves del aparato policiaco y de inteligencia; pero mientras el gobierno mexicano no informe públicamente sobre el caso, tal parece que se trata de hacer recaer la responsabilidad que tiene el propio gobierno en la política hacia Guatemala sobre una sola persona.

Debemos exigir al gobierno mexicano que en el caso de Guatemala adopte una posición congruente con su política hacia Centroamérica. Los refugiados que huyen de las masacres de la dictadura deben ser acogidos de acuerdo a los tratados internacionales sobre refugiados; se les debe proporcionar asistencia de todo tipo y proteger de la virtual cacería a que son sometidos por las bandas paramilitares y el ejército guatemaltecos, que para perseguirlos han penetrado en territorio mexicano —se sabe incluso que en la zona fronteriza de Chiapas hay grupos paramilitares guatemaltecos que hostigan a los refugiados, quienes tienen que soportar además la diaria extorsión a que los someten los agentes aduanales mexicanos para permitirles permanecer en nuestro país.

¡Ninguna colaboración con la dictadura guatemalteca en contra de los refugiados! ■

México y Francia...

(Viene de la página 8)

reconocimiento hecho por los gobiernos de México y Francia.

Ha sido el carácter independiente y masivo del movimiento de solidaridad el que ha permitido todos los avances hechos hasta ahora. Ese carácter debe mantenerse si se quiere obligar al gobierno mexicano a dar una ayuda directa y concreta al pueblo salvadoreño como consecuencia de su declaración. Además, la ayuda directa y desinteresada del pueblo mexicano sigue siendo la más valiosa para el pueblo salvadoreño. Por todo ello, la orientación del movimiento de solidaridad no sólo no cambia, sino que el trabajo militante que implica debe incrementarse, y aprovechar las nuevas posibilidades que representa el reconocimiento del gobierno mexicano a las organizaciones revolucionarias salvadoreñas —lo que también termina de "legalizar" explícitamente toda forma de solidaridad— para llegar a sectores más amplios de la población y realizar acciones de mayor envergadura. ■

Perspectiva Mundial
Nicaragua
EUA construye un ejército títere en
El Salvador
• Informe directo
• Documento del FMLN
Polonia
El programa de Solidaridad para la crisis
Perú
Policía ataca salvajemente a Hugo Blanco
EUA: El dilema de los inquisidores

Revista quincenal.
Adquiérela o suscríbete en
LIBRERIA NUESTRA AMERICA
Baja California 71, Col. Roma

Las mujeres se organizan para la solidaridad con Centroamérica

Por Leslie Serna

El pasado 2 de septiembre se realizó una reunión convocada por el Frente de Mujeres en Apoyo a la Lucha de la Mujer Latinoamericana a la cual asistieron el Grupo de Solidaridad de Mujeres Chilenas, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, la Asociación de Mujeres de El Salvador, y compañeras de Colombia, Venezuela y Yugoeslavia; de México, asistieron el Centro para Mujeres, el Colectivo Cine-Mujer, la Coordinadora de Mujeres Trabajadoras y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

La reunión fue realizada con el objetivo de iniciar un trabajo unitario de todas las mujeres solidarias con la revolución centroamericana mediante el impulso de una jornada de solidaridad que, según se acordó ahí mismo, se efectuará el próximo 18 de octubre en la Escuela Nacional de Antropología de la Ciudad de México.

En la jornada habrá diversas actividades, como presentación de películas, poesía, venta de libros y folletos, etc. Además, las organizaciones interesadas en hacerlo presentarán ponencias acerca de la situación de las mujeres en Centroamérica, de la condición actual de los refugiados centroamericanos que se encuentran en México y de las medidas concretas de solidaridad que deben impulsarse. Las organizadoras precisaron que los temas elegidos para las ponencias son de gran importancia, puesto que con la situación de guerra que recorre a Centroamérica las mujeres viven una situación particular; además, se señaló, las mujeres constituyen una proporción mayoritaria de los refugiados.

Las compañeras presentes coincidieron en la necesidad de agrupar los esfuerzos solidarios de todas las mujeres latinoamericanas para apoyar la lucha de liberación de sus pueblos desde la perspectiva de las propias mujeres, que son parte fundamental de esta lucha. Para la concreción de este esfuerzo se acordó que todas las organizaciones y mujeres independientes se comprometerían con la organización y la difusión de la jornada, y se decidió continuar realizando las reuniones todos los miércoles a las 20:30 horas en la Casa de Chile, ubicada en Avenida Universidad 1134. ■

Bandera Socialista

Encuentro nacional de solidaridad con el pueblo de Copalillo

El 19 y 20 de septiembre en Copalillo, Gro.

Por Alfonso Chanes



En el anterior número de Bandera Socialista informamos, en una nota de última hora, que el pueblo de Copalillo había entregado las instalaciones del Palacio Municipal después de siete días de haberlas mantenido ocupadas. La decisión de la Asamblea Popular Permanente de la Comunidad de Copalillo, a través de su Consejo Directivo, de desalojar el edificio se tomó una vez que fueron discutidas y aceptadas las propuestas hechas por la Secretaría de Gobernación por conducto de su subsecretario Rodolfo González Guevara.

Dichas propuestas consistían en fijar un plazo de quince días hábiles para dar a conocer un dictamen que contemple, en lo fundamental, una salida política al conflicto, sobre la base y el compromiso de la Secretaría de Gobernación de intervenir para que se invaliden las órdenes de aprehensión que el gobierno del Estado de Guerrero ha girado en contra de los dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en la localidad.

El próximo 21 de septiembre se cumplirá el plazo fijado por el mismo gobierno del Estado de Guerrero para hacer pública su resolución sobre la exigencia del pueblo de Copalillo de convocar a nuevas elecciones municipales. Es necesario destacar que, a pesar del compromiso que estableció la Secretaría de Gobernación, durante la entrevista que se tuvo con los representantes del gobierno del Estado de Guerrero el pasado 28 de agosto, fecha en que se desocupó el Palacio Municipal, se amenazó veladamente con dejar que siguieran su curso las órdenes de aprehensión que el Ministerio Público ha girado contra los compañeros en caso de que se "hiciera propaganda contra el gobierno", por lo cual el propio gobierno estatal será el responsable de obstaculizar la solución del conflicto en caso de que compañeros copalillenses sean encarcelados.

La movilización del pueblo de Copalillo ha significado un duro golpe a la política del gobierno de Alejandro Cervantes Delgado. El gobierno del estado ha tenido que reconocer, por la vía de los hechos, la fuerza y el poder de la organización del pueblo de Copalillo. La movilización permanente y la intransigencia de los copalillenses han abierto las puertas de la negociación, aun a pesar de la cerrazón que el gobierno de Cervantes Delgado había mantenido. La ofensiva que éste ha lanzado en contra del pueblo de Copalillo a través de amenazas y calumnias en los medios masivos de información ha sido inútil. Las amenazas y las órdenes de aprehensión que contra los dirigentes del movimiento se han girado no han logrado su objetivo de intimidar a la población. Por el contrario, la instalación de más de cien policías del estado en el Palacio Municipal de Copalillo ha profundizado el sentimiento de rechazo que la población tiene en contra del gobierno y el partido oficial.

La experiencia que el pueblo de Copalillo ha hecho hasta ahora a través de su propia movilización ha sido determinante en el proceso de ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Más de 700 copalillenses han pedido su ingreso al PRT y se preparan para fortalecer su propia estructura orgánica con la formación de comités barriales electos democráticamente en las plenarias barriales de los compañeros que han pedido su incorporación al PRT.

Los mítines y asambleas que se han realizado en Copalillo, la marcha realizada el pasado 16 de julio en la ciudad de Chilpancingo —Guerrero— en apoyo al pueblo de Copalillo y a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y la participación de más de 200 copalillenses en el contingente de la Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" (CNPA) durante la marcha que se realizó el pasado 28 de agosto en la Ciudad de México han demostrado la capacidad y la voluntad del pueblo de Copalillo de continuar la lucha hasta ver instalado en el Ayuntamiento a un Concejo Municipal que realmente responda y defienda sus intereses.

En especial, la participación de los copalillenses en la marcha nacional contra la represión del pasado 28 de agosto ha sentado un precedente muy importante para el desarrollo de la conciencia del pueblo de Copalillo. La confianza en sus propias fuerzas y en su organización se ha reafirmado con la movilización, y hoy las posibilidades de convertir al conflicto de Copalillo en un problema nacional están a la orden del día, en la medida en que otras fuerzas democráticas se comprometan con la solidaridad que en estos momentos requiere el pueblo de Copalillo.

Por esta razón, la Asamblea Popular Permanente de la Comunidad de Copalillo, la Asociación Revolucionaria de Productores de Hamaca de Copalillo (ARPHC) y la Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente (CCRI) han decidido convocar a todas las organizaciones democráticas y revolucionarias a un **Encuentro Nacional de Solidaridad con el Pueblo de Copalillo.**

Dicho encuentro se realizará los próximos días 19 y 20 de septiembre en la misma comunidad de Copalillo, y en él se organizarán un foro de discusión sobre las experiencias de las luchas campesinas en la conquista de los municipios y la política de alianzas de las luchas campesinas con otras organizaciones, y un foro de denuncias de la represión en el campo. De esta forma el encuentro de solidaridad con el pueblo de Copalillo será un importante medio para colectivizar las experiencias que hasta hoy en día existen en diferentes partes del país.

Las organizaciones políticas, obreras y campesinas, estudiantiles y populares, deben dar todo su apoyo a la lucha que el pueblo de Copalillo libra en estos momentos por sacudirse el control del PRI y democratizar a su comunidad. ■

La destitución de Rodríguez Araujo, represión política en la UNAM

En días pasados, el doctor Octavio Rodríguez Araujo fue destituido de su cargo como Jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En su lugar se nombró a Enrique Canudas Sandoval, ex secretario particular del tristemente célebre anterior rector de la UNAM, Guillermo Soberón.

El Director de la FCPyS, Antonio Delhumeau, envió una carta a Rodríguez Araujo en la que le reconoce los méritos académicos mostrados en el desempeño de su cargo para finalizar pidiéndole su renuncia. Delhumeau ha explicado su actitud arguyendo simplemente que existieron "presiones muy fuertes".

La medida adoptada por Delhumeau tomó por sorpresa tanto al propio Rodríguez Araujo como al conjunto de la comunidad de la facultad.

Sin embargo, inmediatamente, maestros, estudiantes y trabajadores de la facultad realizaron una asamblea que, en pleno fin de semestre, reunió a cerca de 800 personas. La concurrida asamblea resolvió exigir "una explicación de las razones y del procedimiento seguido, así como la anulación de la medida"; asimismo, se nombró una "Comisión Coordinadora de Defensa de la Facultad", dado que medidas de este tipo amenazan con minar seriamente los avances democráticos logrados en esa facultad. Por otro lado, la parte estudiantil del Consejo Técnico de la facultad llamó a una reunión de este organismo para que se dieran a conocer públicamente los motivos de la destitución del doctor Rodríguez Araujo, pero esta reunión fue finalmente boicoteada por Delhumeau.

Evidentemente, la destitución de Rodríguez Araujo es una medida atentatoria contra la libertad de cátedra que debe existir en la universidad y que fue tomada de una manera completamente antidemocrática, sin considerar la opinión de la comunidad de la facultad y aun en su contra, como ya se ha visto. Pero lo más grave es que se trata de un caso de represión política: Rodríguez Araujo ha sido destituido por sus convicciones políticas.

En efecto, como el propio Delhumeau lo reconoce, no existen razones de índole académica, que serían las únicas válidas según las normas reglamentarias de la UNAM; la medida se debe a las posiciones políticas que Rodríguez Araujo ha adoptado públicamente, sobre todo las de apoyar el registro legal del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de pronunciarse a favor de la unidad del movimiento de masas en una campaña electoral de clase e independiente del estado, y, en especial, de apoyar la candidatura de Rosario Ibarra de Piedra a la presidencia para las elecciones de 1982. Esto ha quedado aún más claro cuando, después de la destitución de Rodríguez Araujo, se ha iniciado una serie de amenazas de despido en contra de académicos que han asumido posturas políticas similares. Además, sin duda están involucradas iniciativas de educación política impulsadas por Rodríguez Araujo en la facultad que quizás las autoridades universitarias estimen no van de acuerdo con los intereses del partido gobernante.

Es inadmisible la destitución política de Rodríguez Araujo; no es posible aceptar esta medida sin dejar abierta la puerta de la universidad al peligro de que los casos de represión política contra académicos que no compartan las opiniones políticas de las autoridades y el gobierno proliferen. La libertad de expresión y de afiliación política en la universidad, los derechos democráticos que tanto ha costado a los universitarios conquistar, deben defenderse hasta sus últimas consecuencias.

La manera de hacerlo concretamente hoy es revertir la acción política contra Rodríguez Araujo y avanzar en la democratización de la FCPyS que permita a estudiantes y maestros meter en cintura a las autoridades universitarias. ■